

## RESOLUCION N. 02616

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 de 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### I. ANTECEDENTES

De acuerdo con la visita de inspección practicada el 02 de junio de 2005, se profiere Concepto Técnico No. 4771 del 16 de junio de 2005, la Subdirección Ambiental Sectorial, identificó que la sociedad INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., no cumple con la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos y emisiones, indica que la empresa no cumple con la adecuada dispersión de gases y vapores establecidos en el art. 23 del Decreto 948 de 1995 y el artículo I de la Resolución DAMA 1074/97 por cuanto no ha registrado sus vertimientos ante el DAMA.

Mediante Resolución No. 2641 del 06 de octubre de 2005, imponer a la sociedad INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., identificada con Nit. 860351744-7, ubicada en la Carrera 39 No.133A-41, localidad de Suba de esta ciudad, la medida preventiva de suspensión de actividades industriales que produzcan vertimientos de aguas residuales industriales y que generen emisiones atmosféricas.

Mediante Auto No. 2862 del 06 de octubre de 2005, se dispuso iniciar proceso sancionatorio y formular cargos en contra de la sociedad INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., Nit 860351744-7, ubicada en la Carrera 39 No.133A-41, localidad de Suba, de ésta ciudad. Acto notificado en forma personal el 14 de diciembre de 2005, al señor Mario Alfonso Zarate Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 17119641.

Mediante radicado No. 2006ER939 del 05 de enero de 2006, se presentaron cargos contra el Auto No. 2862 del 06 de octubre de 2005.

Se profiere Resolución No. 2317 del 13 de octubre de 2006, por medio del cual se declara responsable a través de su representante legal o quien haga sus veces, a la sociedad INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., SPACIAL LTDA, identificada con Nit. 860351744-7, ubicada en la carrera 39 No 133 A-39/41 de la localidad de Suba de esta ciudad, por desarrollar sus actividades industriales sin el permiso de vertimientos, infringiendo con esta conducta lo establecido en el artículo 113 del Decreto 1594 de 1984, no cumplir con la adecuada dispersión de gases y vapores y con la altura mínima de la chimenea, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 02 de 1982 y se impuso multa de cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a dos millones cuarenta mil pesos moneda legal (\$2.040.000). Acto notificado mediante edicto fijado el 22 de marzo al 09 de abril del año 2007.

Mediante oficio 2010EE40823 se remite el expediente DM-08-05-1175 para que se efectúe el cobro coactivo por parte de la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda.

## I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

### • Fundamentos Constitucionales

La regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala literalmente que:

*“(…) **ARTÍCULO 8.** Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.*

El artículo 58 de la Carta Política establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de reparación los daños que se produzcan a aquellos, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

## • Fundamentos Legales

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece que *“Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”*

El inciso 2° del artículo 107 ibídem, señala:

*“(…) **ARTÍCULO 107.-** (….) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares”.*

El Derecho Administrativo Sancionador, se erige como un importante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes públicos encargados de la gestión ambiental, la obligación de adoptar medidas en procura de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de propender por el interés general, al cual deben someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro Estado Social de Derecho.

En ese sentido, si bien el desarrollo de toda actividad comercial particular tiene como propósito fundamental el satisfacer los intereses privados de sus propietarios, el ejercicio de las actividades de esta índole debe observar las normas que para cada caso se establezcan. En esa línea se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia T-254 de 1993, M.P Antonio Barrera Carbonell, a través de la cual señaló que:

*“(…) Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinan al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.”* (Negritillas y subrayas fuera del texto original).

El artículo 11 de la Ley 1333 de 2009, respecto a los actos no ejecutados establece: *“Pérdida de fuerza ejecutoria. Las sanciones impuestas y no ejecutadas perderán fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo o las normas que lo sustituyan o adicionen”.*

Que en ese sentido y teniendo en cuenta que las actuaciones dentro del presente trámite se iniciaron en vigencia de la Ley 1437 de 2011, corresponde remitirnos a lo establecido en el artículo 91 de la citada Ley:

**“Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo.** Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. **Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.**
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.”

## II. DEL CASO EN CONCRETO

Revisados los actos ejecutorios ordenados en la **Resolución No. 2317 del 13 de octubre de 2006**, dentro del procedimiento sancionatorio contenido en el expediente **SDA-08-2005-1175**, encuentra ésta Secretaría pertinente evaluar su procedencia; o si en su defecto, dadas las circunstancias en que desaparecieron los hechos generadores, correspondería darle un trámite diferente.

Así las cosas, se observa que los actos ejecutorios que declara la responsabilidad de la sociedad e impone multa consistente en cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a dos millones cuarenta mil pesos moneda legal (\$2.040.000), no se pueden efectuar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, esto es más de cinco años, razón por la cual se debe declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo que los ordenó.

Cabe resaltar, que la pérdida de fuerza de ejecutoria no supone que se dude de la validez del acto administrativo sobre el cual recae ésta, sino que establece la pérdida de capacidad de ejecutoriedad del acto, por lo cual no puede generar efectos jurídicos a futuro, tal como lo ha manifestado en la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2010 (Consejero ponente, Enrique Gil Botero, No. 11001-03-26-000-2007-00023-00(33934)), en la cual señala que *“Este fenómeno constituye una vicisitud que afecta la eficacia del acto administrativo y no su validez, de allí que ya no es posible hacer cumplir su contenido por haber desaparecido su carácter obligatorio.”*

Bajo este escenario, y a la luz de la citada norma, ocurre la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto administrativo, basado en el numeral 3, *“Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”*.

Por las razones antes dadas, a esta Secretaría no le queda más que declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 2317 del 13 de octubre de 2006, por medio del cual se declara responsable a través de su representante legal o quien haga sus veces, a la sociedad INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., SPACIAL LTDA, identificada con Nit. 860351744-7, contenida en

el expediente **SDA-08-2005-1175** e impuso multa de cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a dos millones cuarenta mil pesos moneda legal (\$2.040.000); dado que no se logra evidenciar dentro del expediente que se hayan realizado los actos que correspondían para realizarlo.

Por último, teniendo en cuenta que la sociedad objeto de investigación, denominada INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., identificada con Nit. 860351744-7, fue liquidada en el año 2019, está desapareció de la vida jurídica, por lo tanto, la presente decisión carece de destinatario y respecto de terceros interesados se desconoce su domicilio, por lo tanto, se cumple respecto de estos la condición descrita en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, con forme al cual:

**“ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO.** Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutive en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal”.

En este orden de ideas, los terceros interesados serán notificados en los términos del citado artículo 73 de la de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.

### III. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de *“emitir los actos administrativos (...) en los procesos de evaluación para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales y medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, así como los requeridos para el control y seguimiento ambiental.”*

Conforme lo establecido en el numeral 7 del artículo 2° de la Resolución 01865 de 06 de julio de 2021, el Secretario Distrital de Ambiente delegó en cabeza de la Dirección de Control Ambiental, la función de *“7. Expedir los actos administrativos que, de oficio o a petición de parte, declaran o niegan, la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos emitidos dentro de los procesos sancionatorios”.*

Que, en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria de la **Resolución No. 2317 del 13 de octubre de 2006**, por medio del cual se declara responsable a través de su representante legal o quien haga sus veces, a la sociedad **INDUSTRIAS SPACIAL LTDA., SPACIAL LTDA, identificada con Nit. 860351744-7**, contenida en el expediente **SDA-08-2005-1175** e impuso multa de cinco (05) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a dos millones cuarenta mil pesos moneda legal (\$2.040.000); conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

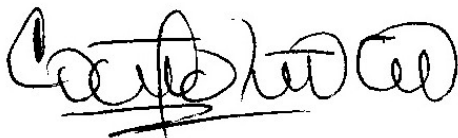
**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **Notificar** el presente acto administrativo en los términos del artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 –Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** – Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo Primero de este proveído, una vez en firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente **SDA-08-2005-1175**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o por intermedio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales conforme a lo dispuesto en los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

**Dado en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de agosto del año 2021**



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:



ANDREA NATALIA ANTONIO FERNANDEZ	C.C: 1018418019	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2021-1269 DE 2021	FECHA EJECUCION:	19/08/2021
<b>Revisó:</b>					
GIOVANNA DEL CARMEN FERNANDEZ ORJUELA	C.C: 52268579	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2021-1081 DE 2021	FECHA EJECUCION:	20/08/2021
<b>Aprobó:</b>					
<b>Firmó:</b>					
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	20/08/2021

**Expediente: SDA-08-2005-1175**